



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

AUTOS: "Incidente N° 1 - ACTOR: ACEITERA GENERAL DEHEZA SA
DEMANDADO: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS s/INC APELACION"

En la Ciudad de Córdoba a 24 días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro, reunida en Acuerdo la Sala "A" de la Excm. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: "Incidente N° 1 - ACTOR: ACEITERA GENERAL DEHEZA SA DEMANDADO: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/INC APELACION" (FCB 33583/2022/1/CA2), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la Resolución de fecha 25 de octubre de 2022 dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto mediante la cual rechazó la medida cautelar solicitada por la firma accionante Aceitera General Deheza S.A.

Puestos los autos a resolución de la Sala los señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: EDUARDO AVALOS - ABEL SANCHEZ TORRES - GRACIELA S. MONTESI.

El señor Juez de Cámara, doctor EDUARDO AVALOS, dijo:

I.- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la Resolución de fecha 25 de octubre de 2022 dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto mediante la cual rechazó la medida cautelar solicitada por la firma accionante Aceitera General Deheza S.A.

II.- Previo a todo, cabe efectuar una reseña de las presentes actuaciones. Es así que compareció a la anterior instancia el doctor Juan Marcos Rougès, en su carácter de apoderado y letrado patrocinante de Aceitera General Deheza S.A., e interpuso demanda contenciosa contra la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva – Agencia-Sede Río Cuarto, con el objeto de que se revoque la Resolución N° 17/2022 (DE LGCN) dictada y notificada a su mandante en fecha el 9.5.2022;

Fecha de firma: 24/10/2024

Firmado por: MIGUEL VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: ABEL G. SÁNCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA



#37385268#431453318#20241024102500277

afirmando que a través de dicha Resolución, la AFIP-DGI resolvió: (i) acumular las presentaciones realizadas por su mandante con fechas 13.1.2022 y 11.3.2022; (ii) no hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos en dichas fechas; y (iii) confirmar el cambio en la categoría asignada a Aceitera en el Sistema de Perfil de Riesgo (en adelante, “SIPER”), lo que importó también un cambio en el Estado asignado a la empresa en el Sistema Simplificado Agrícola (en adelante, “SISA”).

En el mismo escrito, solicitó en los términos de los arts. 230 y 232 del CPCCN y 13 y 15 de la Ley N° 26.854, el dictado de una medida cautelar con el objeto de que se ordene a la AFIP-DGI que: (i) disponga la suspensión de la fuerza ejecutoria de la Resolución 17 de fecha 9/5/2022, mediante la cual el organismo fiscal confirmó su postura y otorgó a su mandante -por su “perfil de riesgo”- la categoría “B” en el SIPER; (ii) consecuentemente, se restablezca la calificación de AGD a SIPER “A”, así como la calificación otorgada en el SISA, Estado “1 - Bajo Riesgo”, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en sede judicial; y (iii) se abstenga de impedir a su mandante de operar en el sistema electrónico de cartas de porte; así como de tomar cualquier acción o medida, preventiva o definitiva, que sea consecuencia mediata o inmediata de la Resolución 17.

Sostuvo que la AFIP rebajó la calificación en el SIPER de AGD con sustento en una causal (*“Fiscalización con ajustes significativos sobre los impuestos declarados”*) que no se encontraba tipificada en la R.G. 3985/2017, sino que se encontraba “publicada” en la página web de la AFIP; instaurando de esta manera, una nueva fuente normativa: su página web. Por lo que la causal en cuestión, al no encontrarse comprendida en una resolución general publicada en el Boletín Oficial, carecería de eficacia (art. 11 de la ley 19.549), no pudiendo ser aplicada al contribuyente. Asimismo, remarcó que en la actualidad se modificó la causal reemplazándola por *“Fiscalización con ajustes sobre los impuestos declarados”*, encontrándose el contribuyente a la merced a los criterios que pueda adoptar el desarrollador de la página web de la AFIP, vulnerando así los principios de legalidad y seguridad jurídica. Manifestó que AGD era una empresa líder en producción agropecuaria (maní, soja, maíz, trigo, girasol, algodón, papa y vicia, entre otros), y que como





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

contribuyente inscripta ante la AFIP, se encontraba alcanzado por el SIPER, en cuyo marco el organismo fiscal asignó categorías a los contribuyentes, de acuerdo con el grado de cumplimiento de sus obligaciones fiscales formales y/o materiales. Y que la nómina de los parámetros utilizados por el sistema para la evaluación de los contribuyentes y/o responsables, no se encontraba descripta en la normativa, sino que era publicada en el micrositio SIPER del sitio web www.afip.gob.ar (cfr. Art. 11 RG 3985), no encontrándose definidas las pautas generales o lineamientos para aquellos parámetros.

Ante ello compareció la representación legal de la demandada y presentó informe en los términos del art. 4 de la Ley N° 26.854. Sostuvo que no se encontraban reunidos en autos los requisitos para la procedencia de la cautelar solicitada, en los términos en que dispone el art. 13 de la Ley N° 26.854 y el art. 230 del CPCCN. En lo sustancial, se opone a la medida solicitada por entender que se confunde con el fondo del asunto, en tanto al pronunciarse respecto del tema, el tribunal debe necesariamente expedirse en relación a qué categoría SIPER y qué estado del sistema SISA debe encuadrarse a la firma actora. Por último, defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, explicitando que fue dictado en el marco de lo regulado por la Resolución General AFIP N° 3985/2017 y la Resolución General Conjunta N° 4248/2018, disposiciones que no son más que el resultado del ejercicio de facultades conferidas por la Ley de Ministerios.

El auto interlocutorio dictado con fecha 25 de octubre de 2022 rechazó la medida cautelar solicitada. Para así resolver, que las circunstancias invocadas por la actora respecto a violaciones al principio de legalidad, a la ley N° 24.522 y al principio de razonabilidad, constituyen cuestiones que deben analizarse a la luz del debate y prueba que se produce durante la sustanciación del proceso principal, máxime considerando que se plantea la ilegalidad de actos administrativos de alcance general. Asimismo, que su acogimiento implicaría un anticipo sobre la cuestión de fondo postulada por la actora, extremo que resulta a toda luz improcedente atento al estado en que se encuentra el proceso.

III.- Luego de efectuar una reseña de los antecedentes de la causa, se agravia el recurrente en primer lugar por cuanto considera que la sentencia



soslaya la flagrante violación del derecho de defensa de Aceitera, desconociendo la existencia de verosimilitud del derecho. Se queja porque al rechazarle la medida cautelar solicitada ha aducido el Juez de grado que las cuestiones planteadas por su parte deben ser analizadas a la ley del debate y prueba que se produzca en el proceso. Manifiesta que no obstante ello, existen otras cuestiones planteadas por Aceitera que revelan la configuración del aludido requisito y que no han sido consideradas en la decisión apelada. Insiste que la causal sancionatoria aplicada por la AFIP -la existencia de ajustes de fiscalización relevantes- no tiene sustento en una ley ni tampoco en una norma de inferior jerarquía. Se agravia por entender que ha sido directamente incorporada al micrositio de la AFIP sin previa publicación oficial, por lo que considera que carece de eficacia (conf. art. 11 de la ley 11.683). Agrega que la Resolución 17 de fecha 9/5/2022 no ha sido más que el hito que ha puesto fin a un procedimiento administrativo viciado, en el marco del cual la AFIP adoptó, en forma unilateral, una medida que produjo inmediatos efectos en el perfil impositivo de la accionante, lo que deriva inevitablemente en serias restricciones a sus derechos constitucionales.

En segundo lugar afirma que AFIP impuso una sanción a Aceitera sin respetar las garantías del procedimiento sumarial. Sostiene que quedó acreditado en la causa que la empresa actora fue sancionada con el cambio de categoría en SIPER con motivo de una causal –accionar ilícito o punible- que no proviene de la ley, sino de una decisión de hecho de la AFIP que simplemente es consignada en su página web a través del respectivo micrositio. Manifiesta que el estado registral que se asigna a un contribuyente es una de las cuestiones más delicadas que deben atenderse, ya que un cambio negativo en su calificación, puede derivar en un devenir de acontecimientos dañosos, si no se puede acceder al debido control judicial que ajuste la situación a derecho. Por lo que merece tacha de inconstitucionalidad el cambio de categoría –sanción- cuando el presupuesto proviene de un hecho ni siquiera general de la Administración.

Como tercer agravio afirma que la sentencia en crisis omite considerar el peligro en la demora invocado por su parte; puntualmente, la suspensión de los reintegros automáticos, el incremento sustancial de las alícuotas de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

retención de IVA e impuesto a las ganancias así como también restringir la emisión de cartas de porte. Respecto al peligro en la demora aduce que ha demostrado que la RG N° 4927/2021 causa graves daños a su mandante por la gravosa calificación asignada en el SISA, lo que impacta directamente en la alícuota de retención aplicable en el IVA así como en el régimen especial de reintegro. Arguye que el informe especial contable acompañado preparado por la reconocida consultora KPMG, revela que durante el periodo comprendido entre el 18/08/2022 y el 30/9/2022, la empresa sufrió un perjuicio financiero que ascendía a la suma de Pesos Ciento veintinueve millones doscientos setenta y cinco mil seiscientos dieciocho con 27/100 (\$ 129.275.618,27); perjuicio financiero que surge de la comparación entre la alícuota de retención de IVA aplicable en función de su encuadramiento en Estado 2 De SISA (7 %), y la que hubiese correspondido de haberse mantenido en Estado 1 de SISA (5 %), perjuicio que continua produciéndose revelándose así el peligro en la demora invocado.

Finalmente, sostiene que la medida solicitada no tiene efectos jurídicos o materiales irreversibles. Hace reserva del Caso Federal. Corrido el traslado de ley, la apoderada de la parte demandada contesta agravios a los que me remito en honor a la brevedad.

Elevadas las actuaciones a esta Alzada pasan las mismas a estudio del Tribunal a los fines de su resolución.

IV.- Ingresaré ahora al tratamiento de los agravios referidos a la procedencia o no de la medida cautelar solicitada por la parte actora y que fuera rechazada por el Juez de grado.

Corresponde en primer lugar establecer si “*prima facie*” se encuentran presentes de acuerdo al estado procesal de la causa, los requisitos de la medida precautoria. Cabe destacar que en anteriores pronunciamientos -análogos a los presentes- esta Sala ha sentado postura en relación a que las medidas cautelares configuran un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, ameritan una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (C.S.J.N. “Grinbank” del 23 de



noviembre de 1995) en atención a la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y de la consideración del interés público en juego (C.S.J.N. “Pérez Cuesta” del 25 de junio de 1996).

Asimismo, la doctrina es unánime al sostener que: “... *la finalidad de la actividad cautelar está ordenada exclusivamente en función del posible cumplimiento de la sentencia que se dicte en un proceso; lo cual afirma el carácter instrumental de la misma que no puede existir de ninguna manera por sí misma, sino que debe referirse necesariamente a un proceso actual o a promoverse dentro de un lapso determinado, sin el cual no tiene razón de ser ...*” (Finochietto, Carlos E., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Astrea, Bs.As., 1.999, T. I, págs. 700/701).

También se ha sostenido que: “*Son instrumentales, por cuanto no tiene un fin en sí mismas, sino que constituyen un accesorio de otro proceso que reviste el carácter de principal del cual dependen y a la vez aseguran el cumplimiento de la sentencia que vaya a dictarse. Su carácter previsional y aún revocable está reconocido en el art. 202 del C.P.C.N....*” (Di Orio, Alfredo J., “Nociones sobre la teoría general de las medidas cautelares”, L.L., T. 1.978-B, págs. 830/831). En nuestro sistema jurídico, las medidas cautelares tienden a impedir que durante el lapso que inevitablemente transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperantes los efectos de la resolución definitiva y, por tanto, propenden a la obtención de una resolución judicial que asegure el cumplimiento de una eventual sentencia de mérito a dictarse en un proceso de conocimiento.

Dicho esto, analizando el marco normativo aplicable al presente caso, el artículo 13 de la ley N° 26.854 (B.O. 30/04/2013) que regula el régimen de medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado Nacional, establece una serie de requisitos -que forman un conjunto de conceptos jurídicos indeterminados- que a la hora de evaluar la suspensión de un acto estatal, ya sea un acto administrativo, un reglamento o una ley, habrán





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

de evaluarse en cada caso concreto; debiéndose concordar con lo previsto en el art. 3, inc. 4° de la mentada ley en el sentido de que las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal.

Conforme estos lineamientos y analizado el escrito de demanda, de su lectura se infiere que la actora pretende mediante la medida cautelar solicitada que: (i) se disponga la suspensión de la fuerza ejecutoria de la Resolución 17 de fecha 9/5/2022, mediante la cual el organismo fiscal confirmó su postura y otorgó a su mandante -por su "perfil de riesgo" - la categoría "B" en el SIPER; (ii) consecuentemente, se restablezca la calificación de AGD a SIPER "A", así como la calificación otorgada en el SISA, Estado "1 - Bajo Riesgo", hasta tanto se dicte sentencia definitiva en sede judicial; y (iii) se abstenga de impedir a su mandante de operar en el sistema electrónico de cartas de porte; así como de tomar cualquier acción o medida, preventiva o definitiva, que sea consecuencia mediata o inmediata de la Resolución 17. Es decir, en definitiva, solicita se modifique el cambio en la categoría asignada a Aceitera en el Sistema de Perfil de Riesgo (en adelante, "SIPER"), lo que importó también un cambio en el Estado asignado a la empresa en el Sistema Simplificado Agrícola (en adelante, "SISA").

Ahora bien, analizado el escrito de demanda surge evidente que la pretensión de fondo se identifica con la medida cautelar peticionada, situación esta prevista en el art. 3. inc. 4° de la mentada Ley 26.854, ello en el sentido de que las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal; toda vez que de otorgarse la misma se estaría dando por sentado la no aplicación de la normativa impugnada, cuyo tratamiento necesariamente constituye el objeto de la litis, como asimismo importaría obtener un fallo anticipado de la causa, soslayándose todas las etapas procesales del pleito, en violación al debido proceso legal como garantía innominada de la Constitución Nacional, diluyéndose la acción impetrada en el otorgamiento de aquella.

Desde esta perspectiva, como ya se ha reiterado en causas análogas a los presentes, no resultan viables aquellas medidas cautelares que pretenden imponer un inoportuno discernimiento sobre cuestiones que, por su complejidad técnica y jurídica, exceden el limitado ámbito de conocimiento

Fecha de firma: 24/10/2024

Firmado por: MIGUEL VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: ABEL G. SÁNCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA



#37385268#431453318#20241024102500277

preliminar propio de una cautelar, como sucede en el caso de autos. Repárese que el proceso precautorio no puede representar adelanto de opinión sobre el fondo del asunto, atendiendo a que las medidas cautelares tienen un contenido meramente preventivo: no juzgan ni prejuzgan sobre el derecho del peticionante" (Couture, Eduardo J. "Fundamentos del Derecho Procesal Civil" Ed. Depalma, Bs.As. 1.997, pág. 326).

V.- Por otra parte, y a mayor abundamiento, entiendo que tampoco se encuentran cumplidos los restantes requisitos relacionados a la verosimilitud del derecho y al peligro en la demora. Doy razones.

El citado **artículo 13** de la ley en análisis dispone: "... 1.- La suspensión de los efectos de una ley, un reglamento, un acto general o particular podrá ser ordenada a pedido de parte cuando concurren simultáneamente los siguientes requisitos: a) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; b) La verosimilitud del derecho invocado; c) La verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto; d) La no afectación del interés público; e) Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles. ...".

La norma transcripta contempla -al igual que lo hace el art. 230 del CPCCN- los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, a la vez que agrega como presupuestos la verosimilitud de la ilegitimidad del acto impugnado, la no afectación del interés público.

En relación al primero de los presupuestos establecidos por el art. 13, inc. a) de la ley en análisis, esto es **la acreditación de perjuicios graves de imposible reparación ulterior -o peligro en la demora-**, cabe señalar que la condición requerida agrega un plus al requisito del periculum in mora dispuesto por el art. 230 del CPCCN. Ello en tanto lo que la norma exige es no ya un peligro, sino la acreditación de un grave daño a sufrir que además sea irreparable.

Ahora bien, considero apropiado -a la hora de analizar la existencia en autos de dicha condición- realizarla en forma tal de no desvirtuar el instituto en cuestión. En tal sentido, entiendo acertado el criterio





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

sentado por la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires en oportunidad de emitir Dictamen sobre el Proyecto de Reforma de medidas Cautelares contra el Estado, citado por FALCON, Enrique M. en su obra: "Reformas al Sistema Procesal - Medidas Cautelares y Tribunales de Casación", Ed. Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe - 15 de julio de 2013, p. 94), que al referirse al mentado requisito dispuso que a la hora de analizar el mismo, *"... basta con demostrar que si no se decreta la suspensión de los efectos de la norma o del acto administrativo, la sentencia que se dicte no se podrá hacer efectiva satisfaciendo la pretensión deducida en el pleito ..."*. (el destacado me pertenece).

Así analizado el presupuesto en cuestión, entiendo que en autos no ha quedado demostrado perjuicio alguno a sufrir por el interesado, de manera tal que se justifique el otorgamiento de la medida cautelar solicitada.

En otros términos, no se verifica en el presente la inminencia de un daño o una situación de gravedad que torne imperiosa la protección jurisdiccional y/o ineludible su admisión, toda vez que en todo caso la situación puede revertirse de manera eficaz y permanente a través de la sentencia que resuelva la cuestión de manera definitiva.

En efecto, la actora en su memorial refiere que el actuar del fisco al modificar su categorización en el SIPER y en el SISA, le acarreará en la práctica mayores cargas impositivas que agravarán su situación financiera y concursal, pero omite respaldar tal afirmación con elementos probatorios que permitan ilustrar los términos del acuerdo de acreedores arribado en sede concursal y en qué modo se vería afectado su cumplimiento, esto es, la incidencia patrimonial concreta que dicho cambio produce.

Lo expuesto me permite concluir que la actora no ha acompañado elementos probatorios que acrediten de modo fehaciente y circunstanciado el daño irreparable que exige la normativa aplicable. Es decir, entiendo que no puede ahora y en esta instancia alegarse que un posible retraso en el dictado de una resolución que resguarde sus derechos le ocasionaría una situación perjudicial irreparable, ya que no se observa un actuar acorde a las circunstancias de parte de la accionante en cuanto a normalizar su situación fiscal a fin de evitar las consecuencias de las que hoy se agravia.



VI.- En otro orden, respecto al requisito de la **verosimilitud en el derecho**, contenido en el inciso b) de la ley de cautelares, al que se suma actualmente el de la ilegitimidad **del acto cuya ejecución se procura suspender** -contenido en el inciso c) de la misma norma- cabe señalar que los mismos se hallan estrechamente ligados con la fundabilidad y razonabilidad de lo demandado.

Ahora bien, respecto de ellos, la tarea del juzgador no consiste estrictamente en la realización de un juicio de certeza acerca de la legitimidad invocada o la verosimilitud del derecho alegado, sino que debe restringirse a la realización de un análisis periférico o superficial, encaminado a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en dicho proceso (ver al respecto PALACIO, Lino E., *"Derecho Procesal Civil - Tomo VIII"*, p. 32). De modo tal que, según un cálculo de probabilidad, sea posible anticipar que en el proceso principal se declarará la certeza del derecho. Esta acreditación, se debe acompañar también, del interés legítimo de la parte que la invoca, traducido en la demostración de la necesidad de disponer de esta medida cuando de no proceder así, se tornaría inocua o ilusoria la sentencia que se dicte o bien se afectaría la igualdad de los litigantes.

En base a lo expuesto, el requisito de la verosimilitud debe ser analizado en función del previsto en el inciso primero. En tal sentido, Enrique M. Falcón en su obra pone de manifiesto que ambos presupuestos son vasos comunicantes, de modo tal que el mayor volumen de uno morigera la necesidad del otro, aunque ambos deben estar presentes en alguna medida (autor citado, *"Reformas al Sistema Procesal - Medidas Cautelares y Tribunales de Casación"*, Ed. Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe - 15 de julio de 2013, p. 93).

Así las cosas, entiendo que dicho recaudo tampoco se verifica en autos, en tanto lo sostenido por la parte actora en cuanto tilda de arbitrario el procedimiento seguido por el fisco a los fines de efectuar la calificación en el micrositio web, encuadrando su actuar en vías de hecho, no resulta suficiente





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

para invalidar la presunción de legitimidad de los actos dictados de conformidad con lo establecido en las Resoluciones N° 3985/2017 y Resolución General N° 4310/2018.

Por lo tanto, la verosimilitud del derecho invocada no se encuentra acreditada, si bien no se trata de un juicio de certeza sobre la misma sino un juicio hipotético o conjetural, puede advertirse que no se encuentra acreditada, ya que el derecho pretendido se basa solo en afirmaciones de la actora. En este sentido, se ha sostenido -como regla- que en el caso de medidas cautelares contra actos legislativos, se debe tener en cuenta la presunción de validez que ellos ostentan (Fallos 328:3018).

Siendo ello así, corresponde recordar que dentro del limitado marco de conocimiento de toda medida cautelar, se advierte que no se encuentra configurado el requisito de la "verosimilitud del derecho" invocado en un grado suficiente para hacer lugar al planteo provisional formulado. En efecto, sabido es que la procedencia de medidas cautelares contra la Administración no difiere de las demás precautorias en cuanto a la reunión de presupuestos, sino que la diferencia se encuentra en afirmaciones, no siempre constantes, respecto a señalar que la verosimilitud en el derecho debe ser apreciada con mayor rigurosidad, en razón del principio de ejecutoriedad del acto administrativo y/o presunción de legitimidad del acto legislativo (Gozáini, Osvaldo Alfredo, *"Las medidas cautelares ante la Ley 26.854"*, suplemento especial, La Ley, Mayo 2013, pág. 82).

VII.- En lo que respecta a los restantes requisitos del artículo 13 de la ley 26.854, el inciso c) *"verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto"*, cabe resaltar que se trata de la otra cara de la verosimilitud en el derecho invocado, ya no enfocada en el derecho que esgrime el peticionante sino en el acto cuestionado en sí mismo, lo cual en autos, como se dijo, no se encuentra acreditado. Asimismo, dicho extremo tampoco puede aún acreditarse en esta etapa del pleito.

En lo concerniente a la *"no afectación del interés público"* y *"que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles"* -incisos d) y e) del precepto legal analizado-, es de destacar que los requisitos acá requeridos son de



conurrencia simultánea, por lo que de no proceder uno de ellos, el análisis del resto resulta inconducente. No obstante ello, la situación que acá se ventila es absolutamente reversible mediante la resolución de fondo.

Cabe señalar que la postura asumida guarda relación con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica que la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas, obliga en los procesos precautorios como el presente, a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para la admisión de toda medida cautelar (ver CSJN, 2009, "Molinos Ríos de la Plata", Fallos: 322:2139, entre otros).

En este sentido, no debe perderse de vista que cuando la medida cautelar se intenta frente a la Administración es necesario que se acredite prima facie la manifiesta arbitrariedad del acto o la norma cuestionada, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de supuestos que la tornan admisible. Ello es así, atento que los actos estatales gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual, en principio, ni los recursos administrativos, ni las acciones judiciales, mediante las que se discute su validez, suspenden su ejecución (CNFed. Contencioso Administrativo — Sala IV, in re: "Playas Subterráneas S.A. c/ Estado Nacional - Subsecretaría de Energía s/ Juicios de conocimiento", cita de L.L. 29/04/1996).

Los fundamentos hasta aquí brindados constituyen motivos más que suficientes a los fines de rechazar la medida cautelar solicitada por la parte accionante; ello al no existir elementos de juicio con la suficiente entidad y convicción como para otorgar la medida peticionada, no dándose en la especie los extremos exigidos para su procedencia. Lo antes dicho no obsta a que el resultado que se propicia pueda ser modificado de acercarse nuevos elementos de juicio que ameriten una solución diferente, por el carácter de mutables y provisorio de las decisiones sobre medidas cautelares.

VIII.- En virtud de lo expuesto, en razón de los argumentos brindados en los considerandos anteriores y teniendo en cuenta el limitado ámbito cognoscitivo que impone el procedimiento cautelar, sin formular un juicio definitivo acerca de la cuestión que se controvierte en este proceso, a





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

criterio de quien suscribe entiendo que no se encuentran reunidos los requisitos establecidos para la procedencia de la medida cautelar solicitada de conformidad a lo dispuesto por el art. 13 de la Ley N° 26.854 y art. 230 del C .P.C.C.N., por lo que corresponde rechazar el recurso de apelación incoado por la parte actora y en consecuencia, confirmar la Resolución dictada con fecha 25 de octubre de 2022 por el Sr. Juez Federal de Río Cuarto, todo de conformidad a las razones expuestas a lo largo del presente pronunciamiento.

Resta expedirme respecto de las costas devengadas en el presente, las que atento el resultado propiciado se imponen a la perdedora, de conformidad a lo dispuesto por el principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 68, primera parte del CPCCN; difiriéndose las regulaciones de honorarios que correspondan para su oportunidad.

El presente pronunciamiento en modo alguno significa adelanto de opinión sobre el fondo del asunto, siendo consecuencia de un análisis superficial propio del estadio cautelar. **ASI VOTO. -**

El señor Juez de Cámara, doctor ABEL SANCHEZ TORRES, dijo:

I.- Analizada la cuestión sometida a decisión de esta Alzada, deseo expresar mi disidencia respecto a la conclusión a la que arriba el colega preopinante. Doy razones.

II.- En primer lugar no comparto la identificación entre la presente precautoria y lo que se resuelva en definitiva. Al momento de resolver el fondo de la cuestión debatida habrá que evaluar, conforme fue planteada la demanda, si corresponde o no la revocación de la Resolución 17 por medio de la que se rechazaron los recursos administrativos incoados, confirmando el cambio en la categoría asignada en el SIPER y por ende en el SISA; mientras que por la presente cautelar, se requiere suspender temporalmente sus efectos hasta tanto se resuelva en definitiva.

III.- En segundo término, haré referencia a que en los autos “MANISUR SA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – VARIOS” (Expte. N° FCB 9394/2021/CA1) consideré que correspondía rechazar la medida precautoria en virtud de que “...en autos no ha quedado demostrado perjuicio



alguno a sufrir por el interesado, de manera tal que se justifique el otorgamiento de la medida cautelar solicitada. En otros términos, no se verifica en el presente la inminencia de un daño o una situación de gravedad que torne imperiosa la protección jurisdiccional y/o ineludible su admisión...En efecto, la actora en su memorial refiere que el actuar del fisco al modificar su categorización en el SIPER y en el SISA le acarrearán en la práctica mayores cargas impositivas que agravarán su situación financiera y concursal, pero omite respaldar tal afirmación con elementos probatorios que permitan ilustrar...la incidencia patrimonial concreta que dicho cambio produce”.

Avocándome al tratamiento del recurso de apelación en los presentes autos, entiendo poner de resalto el informe contable de la firma KPMG acompañado por la actora, con certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, del mismo surge la comparación entre las retenciones aplicadas encontrándose la actora en SISA “Estado 2” y las que hubieran sido aplicadas de haberse encontrado en SISA “Estado 1”, siendo del 5% y 7 % respectivamente, existiendo una diferencia en el caso concreto entre ambas de \$129.275.618,27.

En este sentido, más allá de las impugnaciones que pudiere haber y la valoración que corresponda efectuar al analizar el fondo de la cuestión, considero transcribir algunas conclusiones de la pericia contable oficial llevada a cabo en el principal. De allí se desprende que “...a partir del 15/08/2022, fecha de recategorización de la actora en el SIPER, la alícuota de retención de IVA subió del 5% al 7%.” Que “...a partir del 15/08/2022, fecha de recategorización de la actora en el SIPER, la alícuota de retención de ganancias subió del 0% al 2%”.

Así las cosas, y a diferencia del precedente citado, sí advierto en autos la demostración de la incidencia patrimonial que el cambio de categoría implicó. Ello, considero, me permite analizar el recaudo de la verosimilitud en el derecho invocado.

IV.- Que tal como sostuve en el citado “Manisur” “...los parámetros de la matriz de ponderación que considera el Fisco para evaluar la conducta de los sujetos respecto del cumplimiento de sus obligaciones





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

fiscales, son valoraciones internas y discrecionales propias del Organismo recaudador y no corresponde que el Poder Judicial se inmiscuya en los criterios que utiliza AFIP para categorizar a los contribuyentes, salvo que se demostrase que hubiere mediado error – de hecho o de derecho -, omisión o vicio con entidad suficiente para invalidar el acto dictado, supuestos que no se advierte en el sub examine”.

Así las cosas, si bien considero que no corresponde evaluar la pertinencia de las pautas a considerar por el Fisco a los fines de establecer perfiles de riesgo, lo cierto es que acreditado el impacto patrimonial que la distinta categoría genera, corresponde evaluar los planteos efectuados por la actora.

Afirma la accionante que la causal invocada para la modificación de categoría en SIPER y su consecuente en SISA, en su caso responde a que tiene “*Fiscalización con ajustes sobre los impuestos declarados*”, la cual, entiende resulta irrazonable y carece de causa. Ello en virtud que – conforme acompaña – existen 3 fiscalizaciones pendientes, cuyos presuntos ajustes incluso fueron ingresados al Fisco.

Ahora bien, conforme el superficial análisis que esta etapa procesal requiere, puedo considerar que existe verosimilitud en el derecho invocado, en tanto en principio habría sido cancelado el ajuste resultante de la Orden de Intervención N° 1.892.455 . Por ello, correspondería que por lo menos hasta tanto quede clarificado dicho extremo, deje de surtir efectos la modificación en el contribuyente en cuestión.

V.- Por todo lo expuesto corresponde revocar la resolución recurrida y en consecuencia conceder la medida cautelar solicitada, disponiendo la suspensión de la fuerza ejecutoria de la Resolución 17 de fecha 9.5.2022, mediante la cual el organismo fiscal confirmó su postura y otorgó a la actora la categoría “B” en el SIPER y por ende la modificación en SISA. Ello por el plazo de 6 meses, fijando como contracautela un seguro de caución por los montos que implicaría la diferencia entre ambas categorías. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado en atención a la naturaleza de la cuestión y el resultado arribado (art. 68 2do. pfo. CPCCN).

ASI VOTO.

Fecha de firma: 24/10/2024

Firmado por: MIGUEL VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: ABEL G. SÁNCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA



#37385268#431453318#20241024102500277

La señora Juez de Cámara, doctora GRACIELA S. MONTESI, dijo:

Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez preopinante, doctor ABEL G. SANCHEZ TORRES, votaba en idéntico sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

POR MAYORIA:

I.- Revocar la resolución recurrida y en consecuencia conceder la medida cautelar solicitada, disponiendo la suspensión de la fuerza ejecutoria de la Resolución 17 de fecha 9.5.2022, mediante la cual el organismo fiscal confirmó su postura y otorgó a la actora la categoría “B” en el SIPER y por ende la modificación en SISA. Ello por el plazo de 6 meses, fijando como contracautela un seguro de caución por los montos que implicaría la diferencia entre ambas categorías.

II.- Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado en atención a la naturaleza de la cuestión y el resultado arribado (art. 68 2do. pfo. CPCCN).

III.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.-

GRACIELA S. MONTESI

EDUARDO AVALOS

ABEL G. SANCHEZ TORRES

MIGUEL H. VILLANUEVA

SECRETARIO DE CÁMARA

Fecha de firma: 24/10/2024

Firmado por: MIGUEL VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA



#37385268#431453318#20241024102500277